

VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 138/1993

**MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE
ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN:**

| DATOS CONFIDENCIALES CLASIFICADOS | CLASIFICACIÓN | FUNDAMENTO LEGAL | PERIODO DE CLASIFICACIÓN | PÁGINAS |
|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|
| Narración De Hechos | CONFIDENCIAL | Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a personas identificadas o identificables. | INDEFINIDO , en consideración al criterio directivo previsto en el Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, hasta en tanto las personas facultadas para ello, otorguen el consentimiento expreso al que hace referencia el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| Nombre o seudónimo de víctimas (directas e indirectas), testigos, agraviados y terceros | | | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Nombre de personas servidoras públicas encargadas de la administración y procuración de justicia, y/o encargadas de realizar labores de seguridad pública y nacional | | | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Nombre de autoridades responsables | | | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Sexo | | | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Parentesco | | | | 6, 8, 9 |
| Ocupación | | | | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |

Fecha de clasificación: 07 de julio y 08 de agosto de 2023

Unidad Administrativa Responsable: Segunda Visitaduría General



SÍNTESIS: La Recomendación 138/93, del 26 de julio de 1993, se envió al Gobernador del estado de Michoacán y se refirió al caso [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] presentó denuncia el día 24 de febrero de 1992, con la que se inició la averiguación previa 091/992-II, la cual fue enviada al archivo sin realizarse diversas diligencias de investigación. Se recomendó retirar del archivo la indagatoria de referencia, realizar las diligencias necesarias e integrarla debidamente. Asimismo, iniciar el procedimiento de investigación para determinar la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público que conocieron la referida averiguación previa y, en su caso, ejercitar acción penal y ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.

Recomendación 138/1993

México, D.F., a 26 de julio de 1993

Caso del señor [REDACTED]

C. Lic. Ausencio Chávez Hernández,

Gobernador del estado de Michoacán,

Morelia, Mich.

Muy distinguido señor Gobernador:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 1º; 6º, fracciones II y II; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 44; 46; y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de junio de 1992 y en ejercicio de la facultad de atracción prevista en el Artículo 60 de este último ordenamiento, ha examinado los hechos contenidos en el expediente CNDH/121/93/MICH/SO0982, relacionados con la queja interpuesta por el [REDACTED], y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, con fecha 24 de febrero de 1993, un escrito de queja formulado por el [REDACTED], en el que manifestó que [REDACTED]

[REDACTED] por lo que solicitó la intervención de este Organismo.

2. En virtud de lo anterior, se inició en esta Comisión Nacional el expediente CNDH/121/93/MICH/SO0982, y mediante oficio V2/5669, de fecha 10 de marzo de 1993, fue solicitado al licenciado [REDACTED], Procurador General de Justicia del estado de Michoacán, un informe de los hechos constitutivos de la queja en los que hubiese tenido participación directa el [REDACTED], en ese entonces agente segundo del Ministerio Público de Zamora, Mich., así como copia certificada de todas las constancias de la averiguación previa 091/992-II.

En respuesta, el día 3 de abril de 1993, se recibió en esta Comisión Nacional el oficio 104/93, suscrito por el licenciado [REDACTED], asesor del Procurador General de Justicia del estado de Michoacán, con el cual se remitieron las constancias que obran en la averiguación previa señalada, omitiendo el informe solicitado.

3. Del estudio y análisis de la respuesta enviada por la autoridad, se desprende que:

El día 24 de febrero de 1992, [REDACTED] interpuso querrela ante el licenciado [REDACTED], Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, en contra del [REDACTED] entonces Presidente Municipal de Tangancícuaro, Mich., en la que señala:

[REDACTED]

Asimismo, señaló que [REDACTED]

[REDACTED]

"
.. .

A las 12.00 horas de ese mismo día, señaló el denunciante,

Inmediatamente después, refiere el denunciante que

Por la gravedad del caso, el denunciante se comunicó a la Secretaría Particular del señor Gobernador, en la que el funcionario que lo atendió le indicó que tomaría cartas en el asunto y que se comunicaría con el Presidente Municipal.

Todas las llamadas telefónicas fueron hechas entre las 12.10 y las 12.30 horas de la misma fecha.

A las 12.35 horas, el [REDACTED] se comunicó telefónicamente con el denunciante para manifestarle que [REDACTED]

Por necesidad familiar, el [REDACTED]

[REDACTED]

En la oficina del Juzgado Menor Municipal se encontraban dos personas que estaban escribiendo, los cuales se percataron de la forma en que llevaban al agraviado con rumbo a la cárcel.

El [REDACTED] fue introducido a [REDACTED]

[REDACTED]

A las 13:35 horas, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] El Presidente Municipal le manifestó [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] "

La denuncia fue radicada ante el licenciado [REDACTED] entonces agente segundo del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Zamora, Mich, dando inicio la averiguación previa 91/992-11.

Con fechas 9 y 31 de marzo, 14 y 21 de abril 7 de mayo, y 1 de julio de 1992, el licenciado [REDACTED] agente segundo del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., giró oficios citatorios a diferentes personas relacionadas con los hechos, a fin de que se presentaran a declarar con relación a los hechos denunciados.

El día 10 de julio de 1992, declaró ante el Representante Social el [REDACTED]

[REDACTED] ..

El día 11 de agosto de 1992, declararon ante el Representante Social los [REDACTED]

[REDACTED] .

Con fecha 23 de marzo de 1993, el licenciado [REDACTED], agente segundo del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., acordó que no era posible acreditar

la responsabilidad penal del indiciado, y solicitó a su superior jerárquico la autorización para acordar el archivo de la indagatoria o para que se le diera el debido cumplimiento.

Con oficio 499, de fecha 25 de mayo de 1993, el Representante Social remitió al Subprocurador General de Justicia del estado de Michoacán la averiguación previa número 91/992-II, solicitando que se le autorizara el ejercicio de la acción penal y de reparación del daño.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1. El escrito de queja, suscrito por el [REDACTED], de fecha 22 de febrero de 1993, recibido en esta Comisión Nacional el día 24 del mismo mes y año, al que se adjuntaron, entre otros documentos, los siguientes:

Copia del oficio 838, de fecha 15 de abril de 1992, suscrito por el licenciado [REDACTED], en ese entonces agente del Ministerio Investigador Auxiliar de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, por el cual remitió al licenciado [REDACTED], Delegado Regional de dicha Institución, el escrito de fecha 17 de febrero de 1992, suscrito por el [REDACTED], y dirigido al Gobernador del estado, ordenándole la práctica de todas aquellas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en su oportunidad resolver con estricto apego a derecho.

Copia del acta levantada el día 30 de abril de 1992, en la ciudad de Zamora, Mich., ante el licenciado Roberto Melgoza Salcedo, Coordinador General del Consejo Consultivo Municipal de Seguridad Pública, de la comparecencia del [REDACTED] para señalar que la averiguación previa 091/992-II, se estaba integrando con demasiada lentitud "dado que se han citado algunas personas en varias ocasiones sin que hayan acudido y sin que la Representación Social utilice los medios de apremio que le ordena su Ley Orgánica, retardando así la impartición de justicia, toda vez que para cada ocasión en que se cita a alguna persona a declarar, transcurre un mínimo de diez a quince días. Atento a lo anterior, el agente del Ministerio Público Investigador encargado de integrar esta investigación, no está cumpliendo con las obligaciones que le impone el Artículo 3o., ni haciendo uso de las facultades que este mismo dispositivo legal le concede, pues no está practicando las diligencias necesarias para acreditar la existencia de los delitos cometidos en mi contra ni la responsabilidad del acusado, pese a mi insistencia...".

Copia de diversas publicaciones periodísticas del estado de Michoacán, de fechas 7, 9, 10, 23 y 29 de febrero, 1 de marzo, 17 de mayo y 1 de junio de 1992, en las que se señaló la manera arbitraria en que fue detenido el [REDACTED].

2. Oficio 104/93, de fecha 3 de abril de 1993, suscrito por el licenciado [REDACTED], asesor del Procurador General de Justicia en el estado de Michoacán, en materia de Derechos Humanos, al que anexó copia certificada de la averiguación previa 091/992-II.

En dicha indagatoria tienen primordial importancia:

a) El escrito, de fecha 24 de febrero de 1992, suscrito por el [REDACTED] denunciando ante el licenciado [REDACTED], Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán en Zamora, la comisión de diversos delitos en su agravio, por parte del señor [REDACTED].

b) El escrito, de fecha 5 de febrero de 1992, suscrito por diversos miembros de la organización denominada "Medio Ambiente Zamorano", dirigido al señor [REDACTED], entonces Presidente Municipal de Tangancícuaro, Mich., por cuyo conducto protestaron por la forma prepotente, arbitraria y anticonstitucional en que fue detenido el quejoso.

c) El escrito, de fecha 17 de febrero de 1992, dirigido al doctor Jaime Genovevo Figueroa Zamudio, entonces Gobernador del estado de Michoacán, suscrito por diversas personas, donde le solicitaron garantías para el [REDACTED] y su familia.

d) El acuerdo de ratificación de denuncia del [REDACTED], emitido el 24 de febrero de 1992, por el licenciado [REDACTED] entonces agente segundo del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Zamora, Mich..

e) Los citatorios, de fecha 9 de marzo de 1992, dirigidos por el Representante Social, a los señores [REDACTED], a fin de realizar la práctica de una diligencia penal.

f) El segundo citatorio, de fecha 19 de marzo de 1992, con el cual el agente segundo del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., solicitó la comparecencia del C. [REDACTED] para la práctica de una diligencia de carácter penal.

g) El oficio 1015, de fecha 1o. de julio de 1992, con el cual el Agente Segundo del Ministerio Público Investigador solicitó al segundo comandante de la Policía Judicial del estado la localización y presentación de cuatro personas a fin de que rindieran su declaración ministerial.

h) Los tres citatorios de fecha 1 de julio de 1992, girados por el Representante Social a los señores [REDACTED], a fin de que se presentaran para la práctica de una diligencia de carácter penal.

i) La declaración ministerial del C. [REDACTED], realizada el día 10 de julio de 1992, en la que señaló ser [REDACTED]

a

j) Declaraciones ministeriales de los CC. [REDACTED], que se llevaron a cabo el día 11 de agosto de 1992, donde señalaron, el primero de ellos que:

..".

k) El acuerdo de fecha 23 de marzo de 1993, por el que el licenciado [REDACTED], agente segundo del Ministerio Público Investigador, determinó [REDACTED]

[REDACTED], por lo que el 25 de marzo de 1993, [REDACTED]

3. El acta circunstanciada del día 27 de abril de 1993, en que se hace constar la comunicación telefónica de un Visitador Adjunto de la Comisión Nacional con el licenciado [REDACTED], agente segundo del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., en la que informó que la averiguación previa aún se encontraba en la Procuraduría General de Justicia del estado.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 24 de febrero de 1992, el licenciado [REDACTED] denunció hechos presuntamente constitutivos de ilícitos, ante el licenciado [REDACTED], Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, la cual fue turnada a la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., a cargo en ese entonces del [REDACTED] quien en la misma fecha inició la averiguación previa O91/992-II.

El día 23 de marzo de 1993, el agente segundo del Ministerio Público Investigador, [REDACTED], dictó un acuerdo en el que señaló la imposibilidad de acreditar la presunta responsabilidad penal del indiciado, por lo cual remitió las

El día 3 de junio de 1993 se notificó al agraviado, por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, el acuerdo de archivo emitido en la indagatoria respectiva, por lo que interpuso el recurso de revisión, de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Michoacán, el cual según el quejoso no ha sido resuelto, a pesar de haber transcurrido el término legal para su resolución.

De las constancias con que cuenta esta Comisión Nacional, se desprenden las siguientes observaciones:

Asimismo, [REDACTED] fue hostigado y molestado en su persona sin ordenamiento escrito de autoridad competente, tanto por elementos de la Policía como por el propio Presidente Municipal de Tangancícuaro, violando el mismo Artículo 16 constitucional, ya que los primeros estuvieron al acecho de las actividades del [REDACTED] para poder apresarlos por órdenes del Presidente Municipal, [REDACTED]

8

[REDACTED] . No hay por lo tanto, justificación en ese sentido para haber detenido arbitrariamente al quejoso.

El Ministerio Público al tener conocimiento de todas las instancias a las que recurrió el agraviado para hacerles conocer la inminente comisión de probables ilícitos, debió ejercitar las acciones necesarias entre las autoridades señaladas en la denuncia para la investigación de los hechos y la resolución que en derecho procediese en contra de quien resultase responsable, conforme a lo señalado por el Artículo 97 de la Constitución Política del estado de Michoacán, máxime que el quejoso hizo de su conocimiento de manera pormenorizada los nombres de las personas que conocieron de la situación de hostigamiento que estaba pasando.

Por otra parte, de la denuncia interpuesta por el agraviado, se desprenden hechos en los que el [REDACTED] como Presidente Municipal de Tangancícuaro [REDACTED]

[REDACTED] actos tipificados como ilícitos en el Código Penal de Michoacán, por lo que el agente segundo Investigador de Zamora debió haber utilizado todos los medios que le proporciona la ley para investigar escrupulosamente todo lo que fue hecho de su conocimiento. Es clara la omisión del Representante Social pues no hizo nada, a pesar de las imputaciones directas que el quejoso formuló en contra de las personas que cometieron los ilícitos en su perjuicio; en primer término y de manera principal, se señaló al [REDACTED], a quien no se le hizo requerimiento alguno para declarar sobre los hechos.

Se aprecia también, que la denuncia de hechos y su ratificación se realizaron el día 24 de febrero de 1992 y los primeros citatorios a testigos de los hechos fueron girados el 9 de marzo de ese año y continuaron con otros, de fechas 19 y 31 del mismo mes, 14 y 21 de abril y 7 de mayo de dicho año; que las primeras cuatro personas citadas nunca fueron presentadas a declarar a pesar de la solicitud que con el oficio 1015, del 1 de julio de 1992, hizo el [REDACTED], en ese entonces agente segundo del Ministerio Público Investigador al Segundo Comandante de la Policía Judicial del estado. La solicitud se hizo después de casi dos meses que se giró el último citatorio, según las constancias de la indagatoria, y el comandante nunca informó sobre las diligencias realizadas para la localización y presentación de las personas citadas. Asimismo, de la información proporcionada telefónicamente por el actual Titular de la Segunda Agencia del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., se sabe que las personas citadas nunca declararon.

El día 1 de julio de 1992 se giraron citatorios a otros cuatro testigos, de los cuales se presentaron a declarar tres de ellos; al cuarto únicamente se le giró un oficio citatorio, cuando lo normal era que se le enviaran dos o más, y posteriormente se ordenara a la Policía Judicial del estado su localización y presentación, como lo manifestó el propio Representante Social a un Visitador Adjunto de esta Comisión Nacional, con la que no se está en posibilidad de comprobar el cuerpo del delito, pues se carece del testimonio de una persona que pudiera resultar determinante en la investigación. En este punto, la actuación del Representante Social contraviene el Artículo 59 de la Ley Orgánica del

Ministerio Público del estado de Michoacán, ya que después de disponer que se efectuara ese medio de prueba e investigación no lo realizó, sin que existiera razón alguna para ello.

En la declaración ministerial del [REDACTED], se mencionó a varios testigos involucrados en los hechos y, en ningún momento, el [REDACTED], en ese entonces agente segundo del Ministerio Público, los citó para llevar a cabo debidamente la investigación de los hechos.

El día 11 de agosto de 1992 se realizó la última diligencia en la averiguación previa 091/992-II, consistente en la declaración de dos personas y, hasta siete meses después, el 23 de marzo de 1993, el nuevo agente segundo del Ministerio Público, [REDACTED], emitió acuerdo, señalando la imposibilidad de acreditar la presunta responsabilidad penal del supuesto indiciado en algún ilícito, por lo que envió la indagatoria al Subprocurador General de Justicia en el estado a efecto que le fuese autorizado el acuerdo de archivo, o en su caso, le girase instrucciones para dar cabal cumplimiento a la misma, remitiéndola el 25 de marzo para el fin indicado.

En la averiguación previa no aparece ninguna constancia en la que se aprecie que el [REDACTED], agente segundo del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., antes de emitir el acuerdo, de fecha 23 de marzo de 1993, en el que determina que no es posible acreditar la presunta responsabilidad del indiciado, hubiese solicitado al denunciante el aporte de más datos, contraviniendo con ello lo establecido en el Artículo 74 de la Ley Orgánica mencionada, que señala que si practicadas las diligencias necesarias el Representante Social estima que no se ha podido demostrar la responsabilidad del presunto responsable, "se requerirá a la parte afectada para que aporte más datos".

Como se observa de lo señalado con anterioridad, el agente segundo del Ministerio Público de Zamora, Mich., [REDACTED], durante un periodo de siete meses no realizó ninguna diligencia para continuar la investigación de los hechos denunciados.

En la actuación del agente segundo del Ministerio Público investigador, se observa que entre el acuerdo de 23 de marzo y el oficio del día 25 del mismo mes de 1993, existe una contradicción, pues con el primero solicitó autorización para acordar el archivo de la indagatoria, ya que había determinado que no era posible acreditar presunta responsabilidad penal del supuesto indiciado, y con el segundo, requirió le fuera autorizado el ejercicio de la acción penal.

Se hace notar que faltaron las declaraciones de cinco testigos citados por el mismo Representante Social y que nunca fue atado el [REDACTED], presunto responsable de los hechos denunciados, ni siquiera fue solicitada su localización y presentación a pesar de la imputación directa que existía en su contra, todo lo cual dificultó la investigación de los hechos denunciados y contravino con ello los Artículos 53 y 55 del ordenamiento legal citado con anterioridad.

Cabe señalar que el presunto responsable, al momento de la denuncia, era Presidente Municipal de Tangancícuaro, Michoacán, pero durante la integración de la indagatoria dicha autoridad terminó su encargo, por lo que no se justifica de ninguna manera el que no haya sido localizado y presentado, y ni siquiera citado para que emitiera su declaración respecto a los hechos de la denuncia.

De las constancias que obran en la averiguación previa 091/992-II, se infiere que únicamente se citó a declarar al Comandante de la Policía Municipal, uno de los que detuvieron al [REDACTED], y se omitió investigar quiénes otros participaron en la detención. En cambio, se cuenta con la declaración de dos policías, cuyos términos permiten presumir que no tuvieron participación en la detención del quejoso. Asimismo, cabe hacer notar que en ningún momento el Representante Social solicitó el parte informativo o bitácora de actividades de los policías que realizaron la detención del agraviado, a fin de conocer debidamente los hechos denunciados.

Los licenciados [REDACTED], anterior agente del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., y [REDACTED], actual Representante Social de la Segunda Agencia Investigadora de dicha población, en su momento no dispusieron de todos los medios de prueba e investigación que tuvieron a su alcance para la comprobación del cuerpo del delito y, algunos de los que fueron ordenados, no fueron desahogados en su totalidad.

Del análisis de los hechos y de las constancias con que se cuenta, este Organismo estima que en el presente caso se cometieron violaciones a los Derechos Humanos en agravio del [REDACTED] consistentes en la dilación en la procuración de justicia por parte de los [REDACTED], en su momento agentes del Ministerio Público Investigador, que conocieron de la indagatoria que se inició con motivo de la denuncia del quejoso.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos se permite formular a usted, señor Gobernador, con todo respeto, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Que se instruya al C. Procurador General de Justicia del estado a fin de que, de ser el caso, se retire del archivo la averiguación previa 091/992-II y se ordene al agente segundo del Ministerio Público Investigador de Zamora, Mich., que conoce de los hechos, la realización de las diligencias necesarias, y la resolución legal que en derecho proceda.

SEGUNDA.- Que gire sus instrucciones al C. Procurador General de Justicia del estado para que ordene, a quien corresponda, iniciar el procedimiento interno de investigación para determinar la responsabilidad de los [REDACTED], actualmente agentes del Ministerio Público Investigador en Maravatío y Zamora, Mich., y en caso de existir hechos ilícitos, se inicie la averiguación previa respectiva a fin de ejercitar la acción penal que corresponda y, en su caso, ejecutar las órdenes de aprehensión que se llegaren a dictar.

TERCERA.- De conformidad con el Artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación en su caso, nos sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a esta notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, quedando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en libertad de hacer pública esta circunstancia.

Atentamente

El Presidente de la Comisión Nacional